JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO
Bogotá D.C. Agosto dieciséis de dos mil veintidós.

REF: TUTELA No. 2022-00675-01 de JORGE LUIS GOMEZ PEÑA contra UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

Procede el Despacho en esta instancia a decidir la impugnación que formuló la parte accionante contra el fallo de tutela de julio 15 de 2022 proferido por el Juzgado 11 Civil Municipal de esta ciudad, dentro de la **ACCION DE TUTELA** arriba referenciada.

ANTECEDENTES :

LA ACCION Y EL DERECHO FUNDAMENTAL INVOCADO

El señor JORGE LUIS GOMEZ PEÑA accionante acude a esta judicatura, para que le sean tutelados sus derechos Fundamentales.

Narra el accionante en sus hechos que: firmo orden de prestación de servicios el lo. De 1997 por un termino de tres meses hasta el 30 de junio de 1997. Que el 27 de junio de 1997 se hizo la adición numero 1 a la orden de servicios 125 de abril de 1997 por tres meses hasta el 30 de septiembre de 1997. Que el lo. De octubre de 1997 Se realizó la adición No.2 a la orden de servicios 125 de abril 1 de l.997 por tres meses hasta el 30 de diciembre de 1997.

Que las certificaciones de servicios prestados expedidas en diciembre de 1997 fueron pagadas por anticipado dando cumplimiento al programa de vacaciones colecticas de la Universidad en el mes de diciembre de 1997.

Señala que en febrero 23 de 1998 se suscribió la orden de servicios No.44 de 1998 por dos meses o sea de enero 13 a marzo 13 de 1998. Que los primeros 13 días del mes de enero de 1998 fueron por vacaciones colectivas de la Universidad sin que se las hubieran pagado.

Que de marzo 13 a abril 13 de 1998 se trabajo normalmente sin contrato, y que en abril 13 de 1998 se celebro la orden de servicios 141 de 1998 por ocho meses hasta el 13 de diciembre de 1998. Sin que se le pagara del 13 de noviembre al 13 de diciembre de 1998.

Indica que trabajaba en horario completo, que tomaba vacaciones las que decretaba la universidad en forma colectiva pero que no se las

pagaban. Que la Universidad no le pago las prestaciones sociales causadas durante la vigencia de las ordenes de prestación de servicios consecutivos que firmo con la misma universidad desde abril de 1997 hasta diciembre de 1998.

Señala que se le adeudan 20 meses de trabajo, el salario promedio de los meses no pagados, las cesantías, intereses de cesantías, primas, vacaciones intereses de mora, las sanciones por el no pago oportuno de las cesantías, la indexación respectiva.

Solicita que a través de este mecanismo se proteja el derecho fundamental de petición, y solicita el pago de salarios por los meses trabajados y no cancelados, las cesantías, las vacaciones, las primas de servicios, y de vacaciones, las sanciones correspondientes por el no pago de las cesantías, la indemnización, la indexación respectiva, que en ningún momento se ha extinguido el derecho a reclamar, ya que en el año 2001 hizo una petición para evitar la prescripción.

Por haber correspondido el conocimiento de la tutela al Juzgado 11 Civil Municipal de esta ciudad, fue admitida mediante providencia de julio 6 de 2022, se dispuso la vinculación de JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO, TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, MINISTERIO DEL TRABAJO ordenando notificar a la parte accionada para que diera respuesta. Notificada la parte accionada y vinculada dio respuesta así:

UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Dice que el accionante se vinculó con la Universidad Distrital mediante contrato de prestación de servicios, que en efecto fue objeto de prórroga de acuerdo con las necesidades de la Universidad. Respecto de las vacaciones que alude el accionante, debe tenerse en cuenta que al tratarse su relación contractual de prestación de servicios no había lugar a ello, sino que se terminó el plazo del contrato, lo cual no implica que el periodo en que no hubiera vínculo contractual fueran vacaciones. SEGUNDO: Es cierto que se suscribió contrato de prestación de servicios, pero no es cierto que el accionante gozara de vacaciones colectivas.

Señala que En todo caso, es claro que entre el demandante y la Universidad Distrital se generó un vínculo contractual regido por las normas del derecho civil y no laboral, de tal suerte que no se configuraron los elementos propios del contrato de trabajo.

Aduce que el accionante confunde el tiempo que no se le contrataba como periodo de vacaciones y por consiguiente como no eran vacaciones no se le hacia pago alguno.

Refiere que no es la tutela el medio procesal por el cual al accionante se le deban resolver sus pretensiones que interpuso por medio de su petición ante la accionada, razón por la cual no hay lugar a que por este medio se acceda a las pretensiones que cursan en un proceso ante mi representada. En todo caso, si fuera necesaria la intervención judicial, debo manifestar que los desacuerdos que tenga el accionante debe ventilarlos ante el juez natural, es decir ante y no por medio de la acción constitucional

MINTRABAJO

Indica que debe declararse la improcedencia de la acción de tutela en referencia contra el Ministerio del Trabajo, por falta de legitimación por pasiva, teniendo en cuenta que no existen obligaciones ni derechos recíprocos entre el accionante y esa entidad, lo que da lugar a que haya ausencia por parte del Ministerio, bien sea por acción u omisión, de vulneración o amenaza alguna de los derechos fundamentales invocados por el accionante.

TRIBUNAL SUPERIOR

Dice que Con relación a los hechos en que el accionante sustenta la acción de tutela me permito informarle lo siguiente: Como consta en sistema de gestión judicial el expediente No 11001310501720000011401, se asignó por reparto el 02 de octubre del año 2001, el 30 de agosto de 2002 se confirmó la sentencia del juez, el 08 de octubre del mismo año se concedió el recurso extraordinario de casación, y el 01 de agosto 2003 el expediente fue devuelto al juzgado de origen tal como se constata con la consulta de procesos (<https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=R6Pik9MtWopDZ%2bk0yg%2bPS4zMPIY%3d>) de la página web de la rama judicial, la cual se anexa en formato PDF para que obre como prueba en el expediente.

El Juzgado 11 Civil Municipal mediante sentencia de julio 15 de 2022, negó el amparo solicitado, decisión que fue impugnada por el demandante.

CONSIDERACIONES:

Respecto de la acción ejercida por el perjudicado el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia consagra que: toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento breve y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.

Competencia y Procedencia:

Es competente este Juzgado con fundamento en el Decreto 1382 de 2000.

Del caso Concreto:

Concorre a esta judicatura JORGE LUIS GOMEZ PEÑA solicitando se le amparen los derechos fundamentales y se ordene el pago de prestaciones sociales y demás emolumentos que dice le adeuda la accionada.

Procedencia de la acción de tutela

Legitimación activa

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Así mismo, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 contempla la posibilidad de agenciar derechos ajenos cuando “*el titular de los mismos no está en condiciones de promover su propia defensa*”. En la misma norma, se establece que la legitimación por activa para presentar la tutela se acredita: (i) en ejercicio directo de la acción; (ii) por medio de representantes (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas); (iii) a través de apoderado judicial; y (iv) utilizando la figura jurídica de la agencia oficiosa.

En el presente caso se encuentra acreditado el requisito de legitimación por activa toda vez que la tutela la presenta el señor JPRGE LUIS GOMEZ PEÑA.

Legitimación por pasiva

La legitimación por pasiva en la acción de tutela se refiere a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, a efectos de que sea llamada a responder por la vulneración o amenaza de uno o más derechos fundamentales. En este caso la parte accionada es LA UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

Inmediatez

Este requisito de procedibilidad impone la carga al demandante de presentar la acción de tutela en un término prudente y razonable

respecto del hecho o la conducta que causa la vulneración de sus derechos fundamentales, lo cual se ha de verificar en este fallo si se cumple o no con este requisito.

Subsidiariedad

Según lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, la acción de tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo en los casos en que sea interpuesta como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. Este principio se estudiaría en este fallo para verificar si se cumple o no.

De lo narrado en tutela, de las respuestas dadas por la parte accionada no hay duda que el fallo que en vía de impugnación se ha estudiado debe confirmarse por lo siguiente:

En primer lugar no se cumple con los requisitos de INMEDIATEZ ni SUBSIDIARIEDAD.

Con respecto a **la Inmediatez** ha dicho la alta corporación que La eficacia de la acción de tutela frente a la protección de los derechos fundamentales se encuentra relacionada directamente con la aplicación del principio de la inmediatez, presupuesto *sine qua non* de procedencia de dicha acción, dado que su objetivo primordial se encuentra orientado hacia la protección actual, inmediata y efectiva de derechos fundamentales. Bajo ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, siendo el elemento de la inmediatez consustancial al amparo que la acción de tutela brinda a los derechos de las personas, ello necesariamente conlleva que su ejercicio deba ser oportuno y razonable.

Respecto de la oportunidad en la presentación de la acción de tutela, la alta Corporación ha sido enfática en señalar que debe ejercitarse dentro de un término razonable que permita la protección inmediata del derecho fundamental presuntamente trasgredido o amenazado, pues, de lo contrario, el amparo constitucional podría resultar inocuo y, a su vez, desproporcionado frente a la finalidad perseguida por la acción de tutela, que no es otra que la protección actual, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales.

La Corte se ha ocupado de establecer algunos parámetros que sirven de guía a la labor de juez constitucional en cuanto al análisis de razonabilidad del término para instaurar la acción de tutela, con el fin de verificar si se cumple con el requisito de inmediatez que habilite su procedencia frente a una situación determinada y excepcional. En esos términos, la acción de tutela será procedente, aun cuando no haya sido promovida de manera oportuna, (i) si existe un motivo válido que

justifique la inactividad del interesado; (ii) si la inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión, siempre que exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados^[8]; (iii) si a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de derechos fundamentales es permanente en el tiempo, es decir, si la situación desfavorable es continua y actual; y (iv) cuando la carga de acudir a la acción de tutela en un plazo razonable resulta desproporcionada frente a la situación de sujetos de especial protección constitucional.

En este caso no se satisface el presupuesto de inmediatez, ya que los hechos narrados por el accionante ocurrieron desde el año 1997 y la acción de tutela la instaura en el año 2022, transcurriendo 25 años.

En cuanto al requisito de **subsidiariedad**, la jurisprudencia constitucional ha señalado, de manera reiterada y uniforme, que la acción de tutela es un instrumento de defensa judicial dotado de un carácter subsidiario y residual, en virtud del cual, es posible, a través de un procedimiento preferente y sumario, obtener el amparo inmediato de los derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos expresamente previstos por el legislador.

El carácter subsidiario y residual, significa entonces que solo es procedente supletivamente, es decir, cuando no existan otros medios de defensa a los que se pueda acudir, o cuando existiendo estos, se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable. A este respecto, el artículo 86 de la Constitución Política señala expresamente que “esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Por consiguiente debe tenerse en cuenta que la acción de tutela, en términos generales, no puede ser utilizada como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos dentro de estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten.

Por tanto y teniendo en cuenta lo anterior, no es este el escenario propicio para debatir esta clase de asunto, ya que el accionante debe acudir a la jurisdicción ordinaria y no a la constitucional, toda vez que la acción de tutela no fue instituida para reclamar derechos patrimoniales toda vez que para ella existe una jurisdicción especial.

Por estas razones lo pedido por el accionante no tiene prosperidad y el fallo que se ha estudiado debe confirmarse ya que no amerita revocatoria ni nulidad alguna.

Por lo expuesto, el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá D.C. administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

Primero: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 11 Civil Municipal de Bogotá, de fecha 15 de julio de 2022.

Segundo: Notifíquesele a las partes este fallo por el medio más expedito.

Tercero: Envíese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

La Juez

MARIA EUGENIA FAJARDO CASALLAS

Firmado Por:
Maria Eugenia Fajardo Casallas
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 027 Escritural
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **4d0c2e47f8bab495b19255a6d44543b45533e92c3a6ad6e8125cfbb2be53c194**

Documento generado en 16/08/2022 08:31:50 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>